

# BENEFICIOS PENITENCIARIOS


## DESCRIPCIÓN BOLETÍN 11569-07

REFERENCIA	Modifica diversos cuerpos legales en lo relativo al cumplimiento de penas y medidas de seguridad
INICIATIVA	Mensaje presidencial
ORIGEN	Senado
MINISTERIO	De Justicia y Derechos Humanos
INGRESO	16 de enero, 2018
ARTICULADO	Seis artículos, que modifican, respectivamente, el Código Penal, el Decreto Ley sobre Libertad Condicional, la Ley sobre reinserción social de los condenados, la Ley sobre Indultos Particulares, el Código Procesal Penal y el Código de Procedimiento Penal

## **OPINIÓN** EJECUTIVA DE LYD

Se establecen beneficios de rebaja de penas y permisos penitenciarios para los condenados por haber cometido, genéricamente, violaciones a los derechos humanos (el proyecto enumera el detalle de los delitos); pero al mismo tiempo se les niega el indulto particular que puede otorgar el Presidente de la República; aquí llama la atención que ahora se proponga que el juez, en una causa que ya fue fallada por sentencia ejecutoriada, pueda otorgar un beneficio de sustitución de pena, lo que en esencia, corresponde a la definición legal de indulto.

Por otra parte, el proyecto exige, para otorgar beneficios a los condenados por derechos humanos, que efectúen una declaración de arrepentimiento y sobre el “contexto” de los hechos constitutivos de delito, lo que parece referirse a la delación de otras personas que pudieren haber tenido alguna forma de participación; se trataría de una especie de delación compensada, que es bien discutible en materia penal.

En lo demás, el proyecto, si bien es complejo por la diversidad de normas que modifica, parece estar orientado a impedir el indulto por el Presidente de la República respecto de los condenados por derechos humanos; y en caso de otorgarse, ahora por el juez, una pena menos grave, como el arresto domiciliario, la certeza sobre el estado de salud del condenado (que es la condición para otorgar este beneficio) solo se puede obtener del Servicio Médico Legal 

## **CONTENIDO DEL** **PROYECTO DE LEY**

Enfocado el proyecto sobre la base de las personas eventualmente beneficiadas, se pueden agrupar sus disposiciones en las dos siguientes materias:

### **A.- CONDENADOS POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS**

Respecto de los condenados a penas privativas de libertad, se excluye la posibilidad de que se les otorgue un indulto particular y en su lugar se les permite acceder a permisos de salida siempre que se hubieren auto denunciado y confesado el delito o que, después de condenados, hubieren aportado antecedentes para dilucidar otros delitos de la misma naturaleza; en ambos casos, además, deberán suscribir una declaración de arrepentimiento por el delito, su contexto y mal causado a las víctimas.

También se les permite solicitar la libertad condicional, siempre que reúnan los mismos requisitos recién indicados y, además, que hubieren cumplido dos tercios de la pena o 20 años en caso de presidio perpetuo simple, o de 40 años si se trata de presidio perpetuo calificado. Se les podrá revocar dicho beneficio si después contradijeren la declaración de arrepentimiento.


Los mismos requisitos se exigen para el beneficio de rebaja de condena equivalente a dos meses por cada año de cumplimiento, en caso que se acojan a la ley sobre reinserción social de los condenados.

### **B.- CONDENADOS POR DELITOS COMUNES**

Cuando hubieren incumplido las condiciones impuestas para otorgarles la libertad condicional (y se les hubiere revocado el beneficio), podrán ser nuevamente beneficiados luego de cumplir la mitad del tiempo de la condena.

### **C.- ASPECTOS COMUNES A AMBAS CATEGORÍAS DE DELINCUENTES**

Se sustituye el derecho a la libertad condicional, por la posibilidad de solicitar esa medida.

En los casos en que se deba aplicar alguna medida sustitutiva por haber caído el condenado en demencia o haber contraído una enfermedad de carácter terminal, los exámenes respectivos serán practicados por el Servicio Médico Legal, conforme a protocolos referenciales 

## IV. COMENTARIOS DE MÉRITO

**P**ara la adecuada comprensión del texto del proyecto de ley, es necesario tener presente los conceptos de indulto general y particular, libertad condicional y permisos penitenciarios.

El indulto es una forma de extinción de la responsabilidad penal que consiste en remitir (sinónimo de perdonar), conmutar la pena (esto es, sustituirla por otra menos gravosa) o su reducción o rebaja de pena<sup>1</sup>. Pero el indultado sigue siendo considerado un delincuente mientras no cumpla totalmente la pena impuesta e indultada, u opere la prescripción; es así que será considerado reincidente si vuelve a delinquir o seguirá siendo responsable civil, si el delito que cometió dio lugar a una acción civil. Aquí reside la sustancial diferencia respecto de la amnistía (la que solo procede por ley general o especial), pues en este caso, se “borra” el delito y todas sus consecuencias; es como si nunca hubiere existido el hecho punible<sup>2</sup>. Su semántica hace mención al olvido de los hechos (amnesia).

El indulto puede ser general o especial también llamado particular. En el primer caso solo se puede otorgar por ley, y en el segundo, por decisión del Presidente de la República, mediante decreto expedido a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; este indulto beneficia al condenado (uno o varios) nominativamente mencionados en el decreto. Para el ejercicio de

esta facultad presidencial se ha dictado una ley (N°18.050) que establece requisitos generales y faculta al Presidente para otorgar, excepcionalmente y por resolución fundada, un indulto sin cumplir esas exigencias; además, se trata de un acto administrativo de carácter “confidencial” de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento sobre Indultos Particulares (Decreto supremo 1.542, de 1982).

A propósito de la amnistía, cabe consignar también el decreto ley 409, de 1932, que otorgó a los condenados que cumplieron ciertos requisitos, una calidad similar a la amnistía, pues se los considera “como si nunca hubieran delinquido para todos los efectos legales y administrativos”; además, se le indultarán todas las penas accesorias a que hubieren sido condenados. Esta normativa no ha sido objetada a pesar de otorgar un beneficio que, con otro nombre, coincide con la amnistía, que, como se señaló, solo procede en virtud de una ley (artículo 63 N°16 de la CPR). Esta anomalía nunca ha dado lugar a alguna impugnación dado que se trata medida pro reo que, teóricamente, no debiera afectar a terceros.

La libertad condicional, por su parte, es una forma de cumplir en libertad una pena privativa de libertad; aunque parezca contradictoria su definición, es lo que textualmente señalan el decreto ley sobre esta materia (N°321, de 1925 y su Reglamento, aprobado por decreto 2.442 de 1926): “la libertad condicional es un modo de cumplir en libertad, bajo determinadas condiciones, y una vez llenados ciertos requisitos, la pena privativa de libertad a que está condenado un delincuente por sentencia ejecutoriada” (artículo 1° del Reglamento). La libertad condicional se concede por decreto

<sup>1</sup> Etimológicamente, proviene del latín *indultum*, participio pasado del verbo *indulgeo* que significa complacer, perdonar, condescender; relacionado con *indulgencia* = dulzura.

<sup>2</sup> En el derecho romano se utilizaba la expresión *abolitio facti* (abolición o inexistencia del hecho).

supremo, previo informe de una comisión especial integrada por funcionarios judiciales (jueces y ministros de corte de apelaciones). El requisito básico para la concesión de este beneficio es haber cumplido una parte de la pena privativa de libertad, cuya duración varía dependiendo de la gravedad del delito cometido. El caso más grave es el de los condenados a cadena perpetua efectiva, que no pueden solicitar el beneficio sino una vez cumplidos 40 años de reclusión. Finalmente, la libertad condicional en caso alguno extingue la responsabilidad penal ni modifica la duración de la pena, sino que sólo da la posibilidad de cumplirla con cierto grado de libertad.

En el cuadro de medidas alternativas a la sanción penal, también corresponde mencionar la ley 18.216 que permite al juez de la causa que, en lugar de la pena privativa de libertad que señale el Código Penal o la ley especial aplicable, le remita la pena al acusado, esto es, deje en suspenso el cumplimiento de la pena, o condenarlo a reclusión nocturna o adscribirlo a un sistema de libertad vigilada, según los requisitos y condiciones que, en cada caso, la ley establece. En similar situación puede considerarse la rebaja del tiempo de la condena por haber tenido el interno un comportamiento ejemplar en el establecimiento penitenciario (ley 19.856), caso en el cual puede solicitar este beneficio al Presidente de la República. La diferencia entre ambos sistemas consiste en que en el primer caso se trata de una atribución otorgada al juez de la causa para que, al dictar sentencia, pueda aplicar una pena alternativa (que no forma parte de las penas consideradas en el Código Penal), mientras que en el segundo caso, la situación se asimila a un indulto presidencial regulado por normas

adicionales a la ley de indultos (N°18.050), porque se trata de condenados por sentencia ejecutoriada.

Los permisos penitenciarios, por último, están regulados en gran parte por normas administrativas o reglamentarias. En general, corresponden a medidas que tienden a incentivar el buen comportamiento del recluso en el establecimiento penitenciario y constituyen una especie de “premio”, o bien responden a medidas de carácter humanitario, como la concurrencia del interno al funeral de un pariente cercano u otra situación similar<sup>3</sup>. Su fundamento más sólido radica en la necesidad de favorecer la reinserción del penado en la vida libre. No parece adecuado que al cumplirse completamente, por ejemplo, la pena de 5 años y un día de reclusión, el condenado sea liberado sin haber tenido contacto previo del mundo libre: sin relaciones sociales, tal vez sin domicilio, probablemente con relaciones familiares disminuidas y sobre todo, sin saber qué hacer en el mundo laboral. Por eso, distintos permisos regulados por gendarmería permiten ir “aclimatando” al condenado a la vida libre. Dada la transcendencia de estas medidas se ha sostenido que deberían existir juzgados de ejecución de pena, de manera tal que estos mecanismos fueran determinados por un órgano jurisdiccional y no por medidas administrativas. El proyecto de ley se refiere en general a permisos de salida reglamentarios, lo que puede incluir varias medidas, tales como salida dominical, salida de fin de semana, salida controlada al medio libre y otras.

---

3 Una buena sistematización de esta materia puede verse en Pino Reyes, Octavio, LOS PERMISOS DE SALIDA QUE SE CONCEDEN A LOS CONDENADOS A PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD, Universidad de Chile, Facultad de Derecho, 2012.

## INDULTO Y SUSTITUCIÓN DE PENA

Como ya se señaló, una de las formas que puede revestir el indulto es la sustitución de una pena por otra, que debería ser menos gravosa. Es, como también se dijo, una atribución constitucional exclusiva del Presidente de la República, cuando tiene carácter particular. Ahora bien, el proyecto de ley introduce dos modificaciones importantes: por una parte niega la posibilidad de indulto a quienes hubieren cometido delitos contra los derechos humanos (que el proyecto enumera), y por otra, otorga al juez la facultad de sustituir una pena privativa de libertad por la de reclusión domiciliaria total, cuando el condenado cumpliera el requisito de padecer una enfermedad terminal (nuevo artículo 687 del Código de Procedimiento Penal, introducido por el N°3 del artículo sexto del proyecto).

La primera modificación ofrece problemas de constitucionalidad, toda vez que la facultad de indultar el Presidente de la República la ejerce conforme a las normas generales que establezca la ley (N°18.050); si bien la ley vigente ya impide el indulto cuando no se cumplen ciertos requisitos, también permite, excepcionalmente, otorgar el indulto sin cumplimiento de los requisitos legales, pero por motivos fundados, como podría ser una enfermedad terminal; podría también llegar a vulnerar derechos de los actuales condenados, que pueden acudir al sistema penal bajo el cual fueron juzgados y condenados, lo que incluye la posibilidad de indulto presidencial, que ahora se derogaría para ciertos condenados, lo que constituye una discriminación no justificada. Se requiere, por lo tanto, un mayor examen de una norma que, con posterioridad al juzgamiento, podría incidir en los derechos que asisten al condenado.

Lo segundo, en cambio, sobre traspasar al juez la facultad de sustituir una pena impuesta por sentencia

ejecutoriada por otra distinta, genera graves dudas de constitucionalidad. En efecto, la naturaleza de las instituciones jurídicas no está determinada por su nombre o denominación, sino por su estructura interna y efectos. Así, la sustitución de una pena privativa de libertad por la reclusión domiciliaria, aunque no se denomine indulto, corresponde a su definición esencial y está constitucionalmente radicada en el Presidente de la República; el proyecto la radica ahora en el juez, sin haberse modificado previamente la norma constitucional.

Podría sostenerse, para salvar la norma, que la “reclusión domiciliaria total” no aparece en el listado de penas del artículo 21 del Código Penal. Esta forma de esquivar la inconstitucionalidad supondría afirmar que no existen sanciones penales fuera del artículo 21 del Código citado, o que la sustitución de penas por la vía del indulto solo tiene lugar dentro de la escala del artículo 21. Ello se estrella contra la realidad de las penas sustitutivas establecidas por ley y no vale la pena insistir.

Tampoco se salva la observación anterior por el hecho de tratarse de una modificación que formalmente se refiere a normas procesales, pues éstas reglan el procedimiento, mientras que la modificación propuesta se refiere a personas condenadas por sentencia ejecutoriada; desde este punto de vista es indiferente la denominación del cuerpo legal que la contemple. Sólo daría lugar a considerar que la norma no ha sido bien ubicada en el contexto normativo. Adicionalmente, como ya se señaló, es posible discutir la conveniencia de establecer jueces de ejecución de penas; pero ello requiere una normativa completa sobre la materia y no una facultad excepcional otorgada a un juez del sistema procesal. En este sentido, la misma crítica merece el nuevo artículo 468 bis que se introduce al Código Procesal Penal mediante el N°3 del artículo quinto del proyecto de ley.

Cabe señalar que, desde un punto de vista práctico, la medida propuesta resulta de toda conveniencia a favor de una persona que sufre una enfermedad terminal, y constituye una medida humanitaria; eso no está en discusión.

Pero debe considerarse la observación formulada sobre la facultad entregada ahora al juez y que constitucionalmente corresponde al Presidente de la República, sobre todo en presencia de una norma de rango orgánico constitucional, pues dado que incide en la organización y atribuciones de los tribunales, deberá ser objeto de control por el Tribunal Constitucional (artículo 93 N°1 de la CPR), y contar con informe de la Corte Suprema (artículo 77 de la CPR).

En cuanto al fondo, no se divisa la razón para que esta medida humanitaria no sea dispuesta, mediante indulto, por el Presidente de la República, cumpliendo los requisitos específicos que se establezcan. Además, el proyecto impide el indulto por el Presidente de la República para condenados por violaciones a los derechos humanos, indulto que actualmente (y sin este proyecto de ley) sería procedente.

## ENFERMOS MENTALES Y TERMINALES

En el marco del proyecto se establece que en los casos de personas condenadas por violaciones a los derechos humanos a las cuales se deba

aplicar una medida sustitutiva por acreditar una enfermedad mental, a través de los exámenes realizados por el Servicio Médico Legal, se les exigirá como requisito presentar una declaración pública que contenga una manifestación inequívoca de su arrepentimiento por los hechos cometidos, por el contexto de los mismos y por el mal causado a las víctimas y sus familias.

El mencionado requisito obliga a preguntar si en verdad es válido que el condenado con enfermedad mental pueda declarar públicamente su arrepentimiento, ya que en líneas generales, la persona condenada que manifieste alteraciones en los procesos de razonamiento y comportamiento la facultad de reconocer la realidad, emociones o entablar relaciones con los demás<sup>4</sup>, no podría cumplir con dicho requisito; resulta así que esta declaración no podría tener validez jurídica, debido a que, el condenado precisamente es considerado incapaz por estar privado de razón, total o parcialmente y no está en condiciones de realizar obra de voluntad consciente. Los actos jurídicos sin duda alguna tienen que provenir de un cerebro lúcido, apto para apreciar su significación y calcular su alcance.

De modo que el contenido del proyecto, en este aspecto (nuevo artículo 80 del Código Penal, entre otros) no tendría razón de ser, puesto que es evidente la dificultad de cumplimiento que dicho requisito presenta para las personas condenadas que posean algún tipo de enfermedad mental.

Por otra parte, tratándose de enfermos terminales que no necesariamente estén impedidos mentalmente, la declaración puede traer consecuencias no bien previstas en el proyecto de

4 Diccionario de Psicología Social, Enfermedad Mental, 2016. Disponible en: <http://psicopsi.com/diccionario-de-psicologia-social-letra-E-enfermedad-mental-terminos-de-psicologia-social>. Recuperado el 30 de enero de 2018.

ley. En efecto, al exigir, además del cumplimiento de los requisitos generales que fije el respectivo reglamento, que los condenados suscriban en forma previa una declaración pública que contenga una manifestación inequívoca de su arrepentimiento por los hechos cometidos que les atribuye la sentencia condenatoria, por el contexto de los mismos y por el mal causado a las víctimas y sus familiares, se podría estar induciendo a los condenados a involucrar, real o presuntivamente,

a otras personas bajo los términos del “contexto” de los hechos. Puede leerse como una invitación a la delación a cambio del beneficio de permiso de salida, lo que puede merecer diversas consideraciones de carácter ético, similares a las que se esgrimieron a propósito de la delación compensada. Es una materia que no debería despacharse sin un adecuado examen y en todo caso, previas las explicaciones del origen de la norma, por parte del ministerio respectivo ■■■



# V. TEXTO DEL PROYECTO DE LEY

## Artículo Primero.- Modifícase el Código Penal, en el siguiente sentido:

1. Suprímese en el numeral 3° del artículo 32 bis la frase “o por el padecimiento de un estado de salud grave e irrecuperable, debidamente acreditado, que importe inminente riesgo de muerte o inutilidad física de tal magnitud que le impida valerse por sí mismo” <sup>5</sup>.
2. Agréguese al artículo 80 los siguientes incisos quinto, sexto y final nuevos:

“Para la concesión de los permisos de salida que determinen los reglamentos se deberá considerar especialmente la naturaleza y la gravedad de los delitos cometidos.

5 El N°3 del artículo 32 BIS quedaría con la siguiente redacción;

Art. 32 BIS. La imposición del presidio perpetuo calificado importa la privación de libertad del condenado de por vida, bajo un régimen especial de cumplimiento que se rige por las siguientes reglas:

3.º No se favorecerá al condenado por las leyes que concedan amnistía ni indultos generales, salvo que se le hagan expresamente aplicables. Asimismo, sólo procederá a su respecto el indulto particular por razones de Estado ~~o por el padecimiento de un estado de salud grave e irrecuperable, debidamente acreditado, que importe inminente riesgo de muerte o inutilidad física de tal magnitud que le impida valerse por sí mismo.~~ En todo caso el beneficio del indulto deberá ser concedido de conformidad a las normas legales que lo regulen.

Se entenderá que son particularmente graves los delitos previstos en los párrafos 3<sup>6</sup> y 4<sup>7</sup>, ambos del título III<sup>8</sup>; en los párrafos 10<sup>9</sup> y 15<sup>10</sup>, ambos del título VI<sup>11</sup>; en los párrafos 5<sup>12</sup> y 6<sup>13</sup>, ambos del título VII<sup>14</sup> y en los párrafos 1<sup>15</sup> y 3<sup>16</sup>, ambos del título VIII<sup>17</sup>; todos del Libro Segundo; que en conformidad al derecho internacional constituyan genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, cualquiera haya sido la denominación o clasificación que dichas conductas hubieren tenido al momento de su condena; y los delitos tipificados en la ley N°20.357<sup>18</sup>. Los condenados por estos delitos solo podrán solicitar permisos de salida en los siguientes casos:

- a) Si en la determinación de su pena se hubiere considerado la atenuante de confesión espontánea o la de colaboración sustancial de los números 8° y 9° del artículo 11<sup>19</sup>; o
- b) Si después de ejecutoriada su condena, acrediten por cualquier medio idóneo que han aportado antecedentes serios y efectivos de los que tengan conocimiento, en causas criminales por delitos de la misma naturaleza.

En ambos casos se exigirá, además del cumplimiento de los requisitos generales que fije el respectivo reglamento, que los condenados suscriban en forma previa una declaración pública que contenga una manifestación inequívoca de su arrepentimiento por los hechos cometidos que les atribuye la sentencia condenatoria, por el contexto de los mismos y por el mal causado a las víctimas y sus familiares.”<sup>20</sup>.

6 Crímenes y simples delitos contra la libertad y seguridad, cometidos por particulares (por ejemplo, detenciones ilegales, sustracción de menores).

7 De la tortura, otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y de otros agravios inferidos por funcionarios públicos a los derechos garantizados por la Constitución.

8 Libro Segundo, Título III: Crímenes y simples delitos que afectan los derechos garantizados por la Constitución.

9 De las asociaciones ilícitas.

10 De la infracción de las leyes o reglamentos sobre inhumaciones y exhumaciones.

11 Libro Segundo, Título VI: Crímenes y simples delitos contra el orden y la seguridad públicos cometidos por particulares.

12 De la violación.

13 Del estupro y otros delitos sexuales.

14 Libro Segundo, Título VII: Crímenes y delitos contra el orden de las familias, contra la moralidad pública y contra la integridad sexual.

15 Del homicidio.

16 Lesiones corporales.

17 Libro Segundo, Título VIII: Crímenes y simples delitos contra las personas.

18 Ley 20.357: Tipifica crímenes de lesa humanidad y genocidio y crímenes y delitos de guerra

19 Art. 11. Son circunstancias atenuantes:

8°. Si pudiendo eludir la acción de la justicia por medio de la fuga u ocultándose, se ha denunciado y confesado el delito.

9°. Si se ha colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos.

20 El artículo 80 quedaría con la siguiente redacción;

Art. 80. Tampoco puede ser ejecutada pena alguna en otra forma que la prescrita por la ley, ni con otras circunstancias o accidentes que los expresados en su texto.

**Artículo Segundo.-** Modifícase el decreto ley N°321, que establece la libertad condicional para los penados, en el siguiente sentido:

1. Reemplázase en el artículo 2° la frase “tiene derecho a que se le conceda” por la expresión “podrá ser beneficiado con la concesión de”<sup>21</sup>.
2. Incorpórase en el artículo 3° los siguientes incisos octavo y final nuevos:

“A las personas condenadas por alguno de los delitos previstos en los párrafos 3 y 4, ambos del título III; en los párrafos 10 y 15, ambos del título VI; en los párrafos 5 y 6, ambos del título VII; y en los párrafos 1 y 3, ambos del título VIII; todos del Libro Segundo del Código Penal, que en conformidad al derecho internacional constituyan genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, cualquiera haya sido la denominación o clasificación que dichas conductas hubieren tenido al momento de su condena; o por alguno de los delitos tipificados en la ley N°20.357<sup>22</sup>; se les podrá conceder el beneficio de la libertad condicional solo en los siguientes casos:

- a) Si en la determinación de su pena se hubiere considerado la atenuante de confesión espontánea o la de colaboración sustancial de los números 8° y 9° del artículo 11<sup>23</sup> del Código Penal; o

Se observará también además de lo que dispone la ley, lo que se determine en los reglamentos especiales para el gobierno de los establecimientos en que deben cumplirse las penas, acerca de los castigos disciplinarios, de la naturaleza, tiempo y demás circunstancias de los trabajos, de las relaciones de los penados con otras personas, de los socorros que pueden recibir y del régimen alimenticio.

En los reglamentos sólo podrán imponerse como castigos disciplinarios, el encierro en celda solitaria e incomunicación con personas extrañas al establecimiento penal por un tiempo que no exceda de un mes, u otros de menor gravedad.

La repetición de estas medidas deberá comunicarse antes de su aplicación al juez del lugar de reclusión, quien sólo podrá autorizarla por resolución fundada y adoptando las medidas para resguardar la seguridad e integridad, del detenido o preso.

Para la concesión de los permisos de salida que determinen los reglamentos se deberá considerar especialmente la naturaleza y la gravedad de los delitos cometidos.

Se entenderá que son particularmente graves los delitos previstos en los párrafos 3 y 4, ambos del título III; en los párrafos 10 y 15, ambos del título VI; en los párrafos 5 y 6, ambos del título VII; y en los párrafos 1 y 3, ambos del título VIII; todos del Libro Segundo; que en conformidad al derecho internacional constituyan genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, cualquiera haya sido la denominación o clasificación que dichas conductas hubieren tenido al momento de su condena; y los delitos tipificados en la ley N°20.357. Los condenados por estos delitos solo podrán solicitar permisos de salida en los siguientes casos:

- a) Si en la determinación de su pena se hubiere considerado la atenuante de confesión espontánea o la de colaboración sustancial de los números 8° y 9° del artículo 11; o
- b) Si después de ejecutoriada su condena, acreditaran por cualquier medio idóneo que han aportado antecedentes serios y efectivos de los que tengan conocimiento, en causas criminales por delitos de la misma naturaleza.

En ambos casos se exigirá, además del cumplimiento de los requisitos generales que fije el respectivo reglamento, que los condenados suscriban en forma previa una declaración pública que contenga una manifestación inequívoca de su arrepentimiento por los hechos cometidos que les atribuye la sentencia condenatoria, por el contexto de los mismos y por el mal causado a las víctimas y sus familiares.

21 El artículo 2 quedaría con la siguiente redacción:

Art. 2.o Todo individuo condenado a una pena privativa de libertad de más de un año de duración, podrá ser beneficiado con la concesión de su libertad condicional, siempre que cumpla con los siguientes requisitos:

- 1.o Haber cumplido la mitad de la condena que se le impuso por sentencia definitiva. Si hubiere obtenido, por gracia, alguna rebaja o se le hubiere fijado otra pena, se considerará ésta como condena definitiva;
- 2.o Haber observado conducta intachable en el establecimiento penal en que cumple su condena, según el Libro de Vida que se le llevará a cada uno;
- 3.o Haber aprendido bien un oficio, si hai talleres donde cumple su condena; y
- 4.o Haber asistido con regularidad y provecho a la escuela del establecimiento y a las conferencias educativas que se dicten, entendiéndose que no reúne este requisito el que no sepa leer y escribir.

22 Para las referencias legales de este inciso véanse las notas a pie de página del N°2 del ARTÍCULO PRIMERO.

23 Véase nota a la letra a) del N°2 del artículo primero del proyecto de ley.

- b) Cuando, después de ejecutoriada la condena, acrediten por cualquier medio idóneo que han aportado antecedentes serios y efectivos de los que tengan conocimiento, en causas criminales por delitos de la misma naturaleza.

En ambos casos se exigirá, además del cumplimiento de los requisitos generales, que los condenados suscriban en forma previa una declaración pública que contenga una manifestación inequívoca de su arrepentimiento por los hechos cometidos que les atribuye la sentencia condenatoria, por el contexto de los mismos y por el mal causado a las víctimas y sus familiares; y que hayan cumplido a lo menos dos tercios de la pena, o, en caso de presidio perpetuo, los años de privación de libertad efectiva establecidos en los incisos primero y segundo.”<sup>24</sup>.

### 3. Agrégase en el artículo 5° el siguiente inciso final nuevo:

“Para revocar la libertad condicional respecto de los condenados referidos en el inciso octavo del artículo 3°<sup>25</sup>, la Comisión considerará especialmente cualquier acción o manifestación pública que constituya una negación o contradicción al contenido de la declaración referida en el inciso final del citado artículo.”<sup>26</sup>.

24 El Artículo 3° quedaría con la siguiente redacción;

Art. 3. A los condenados a presidio perpetuo calificado sólo se les podrá conceder la libertad condicional una vez cumplidos cuarenta años de privación de libertad efectiva. Cuando fuere rechazada la solicitud, no podrá deducirse nuevamente sino después de transcurridos dos años desde su última presentación.

A los condenados a presidio perpetuo se les podrá conceder el beneficio de la libertad condicional una vez cumplidos veinte años.

A los condenados por los delitos de parricidio, homicidio calificado, robo con homicidio, violación con homicidio, violación de persona menor de catorce años, infanticidio, los contemplados en el número 2 del artículo 365 bis y en los artículos 366 bis, 366 quinquies, 367, 411 quáter, 436 y 440, todos del Código Penal, homicidio de miembros de las Policías y Gendarmería de Chile, en ejercicio de sus funciones y elaboración o tráfico de estupefacientes, se les podrá conceder el beneficio de la libertad condicional cuando hubieren cumplido dos tercios de la pena.

A los condenados a más de veinte años se les podrá conceder el beneficio de la libertad condicional una vez cumplidos diez años de la pena, y por este solo hecho ésta quedará fijada en veinte años.

Los condenados por hurto o estafa a más de seis años, podrán obtener el mismo beneficio una vez cumplidos tres años.

Los condenados por los incisos tercero y cuarto del artículo 196 de la ley de Tránsito podrán obtener el mismo beneficio una vez cumplidos dos tercios de la condena.

A los condenados a presidio perpetuo por delitos contemplados en la ley N° 18.314, que fija la penalidad por conductas terroristas y, además condenados por delitos sancionados en otros cuerpos legales, se les podrá conceder el beneficio de la libertad condicional, una vez cumplidos 10 años de pena, siempre que los hechos punibles hayan ocurrido entre el 1 de enero de 1989 y el 1 de enero de 1998, y los condenados suscriban en forma previa una declaración que contenga una renuncia inequívoca al uso de la violencia.

A las personas condenadas por alguno de los delitos previstos en los párrafos 3 y 4, ambos del título III; en los párrafos 10 y 15, ambos del título VI; en los párrafos 5 y 6, ambos del título VII; y en los párrafos 1 y 3, ambos del título VIII; todos del Libro Segundo del Código Penal, que en conformidad al derecho internacional constituyan genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, cualquiera haya sido la denominación o clasificación que dichas conductas hubieren tenido al momento de su condena; o por alguno de los delitos tipificados en la ley N° 20.357; se les podrá conceder el beneficio de la libertad condicional solo en los siguientes casos:

a) Si en la determinación de su pena se hubiere considerado la atenuante de confesión espontánea o la de colaboración sustancial de los números 8° y 9° del artículo 11 del Código Penal; o

b) Cuando, después de ejecutoriada la condena, acrediten por cualquier medio idóneo que han aportado antecedentes serios y efectivos de los que tengan conocimiento, en causas criminales por delitos de la misma naturaleza.

En ambos casos se exigirá, además del cumplimiento de los requisitos generales, que los condenados suscriban en forma previa una declaración pública que contenga una manifestación inequívoca de su arrepentimiento por los hechos cometidos que les atribuye la sentencia condenatoria, por el contexto de los mismos y por el mal causado a las víctimas y sus familiares; y que hayan cumplido a lo menos dos tercios de la pena, o, en caso de presidio perpetuo, los años de privación de libertad efectiva establecidos en los incisos primero y segundo.

25 Véase el artículo segundo, número 2 de este proyecto de ley.

26 El artículo 5 quedaría con la siguiente redacción;

Art. 5. La libertad condicional se concederá por resolución de la Comisión de Libertad Condicional indicada en el artículo anterior, previos los trámites correspondientes, y se revocará del mismo modo.

En todo caso, tratándose de condenados a presidio perpetuo calificado, la libertad condicional deberá ser concedida o revocada por el pleno de la Corte Suprema, previo cumplimiento de los trámites previstos en el artículo precedente.

La resolución que conceda, rechace o revoque la libertad condicional en el caso establecido en el inciso precedente se comunicará a la Comisión respectiva, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos 6° y 7° del presente decreto ley y en el reglamento respectivo.

Para revocar la libertad condicional respecto de los condenados referidos en el inciso octavo del artículo 3°, la Comisión considerará especialmente cualquier acción o manifestación pública que constituya una negación o contradicción al contenido de la declaración referida en el inciso final del citado artículo.

4. Reemplázase en el artículo 7° la frase “volverá a tener derecho a salir en” por la siguiente: “podrá volver a ser beneficiado con la concesión de su” <sup>27</sup>.
5. Reemplázase en el artículo 8° la oración “tendrán derecho a que, por medio de una resolución de la respectiva Comisión, se les conceda la libertad completa” por la siguiente: “podrán ser beneficiados con la concesión de su libertad completa, por medio de una resolución de la respectiva Comisión” <sup>28</sup>.

**Artículo Tercero.-** Agrégase en la ley N°19.856, que crea un sistema de reinserción social de los condenados sobre la base de la observación de buena conducta, a continuación del actual artículo 17, el siguiente artículo 17 bis nuevo:

**“Artículo 17 bis.-** Límites en el acceso a los beneficios. A los condenados por alguno de los delitos previstos en los párrafos 3 y 4, ambos del título III; en los párrafos 10 y 15, ambos del título VI; en los párrafos 5 y 6, ambos del título VII; y en los párrafos 1 y 3, ambos del título VIII; todos del Libro Segundo del Código Penal, que en conformidad al derecho internacional constituyan genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, cualquiera haya sido la denominación o clasificación que dichas conductas hubieren tenido al momento de su condena; o por alguno de los delitos tipificados en la ley N°20.357<sup>29</sup>; se les podrán conceder los beneficios contenidos en la presente ley solo en los siguientes casos:

- a) Si en la determinación de su pena se hubiere considerado la atenuante de confesión espontánea o la de colaboración sustancial de los números 8° y 9° del artículo 11<sup>30</sup> del Código Penal; o
- b) Cuando, después de ejecutoriada la condena, acrediten por cualquier medio idóneo que han aportado antecedentes serios y efectivos de los que tengan conocimiento, en causas criminales por delitos de la misma naturaleza.

En ambos casos se exigirá, además del cumplimiento de los requisitos generales, que quienes solicitan estos beneficios suscriban en forma previa una declaración pública que contenga una manifestación inequívoca de su arrepentimiento por los hechos cometidos que les atribuye la sentencia condenatoria, por el contexto de los mismos y por el mal causado a las víctimas y sus familiares.”.

<sup>27</sup> El artículo 7 quedaría con la siguiente redacción;

Art. 7. El condenado en libertad condicional que fuere condenado por ebriedad o por cualquier delito, que se ausentare sin autorización del lugar que se le haya fijado como residencia, que se comportare mal o no asistiere con regularidad al taller donde trabaje y a una escuela nocturna, o no se presentare sin causa justificada, durante dos semanas consecutivas a la prefectura de policía, ingresará nuevamente al establecimiento penal que corresponda, a cumplir el tiempo que le falte para cumplir su condena; y solo después de haber cumplido la mitad de este tiempo, podrá volver a ser beneficiado con la concesión de su libertad condicional, en las mismas condiciones y con las mismas obligaciones señaladas.

<sup>28</sup> El artículo 8 quedaría con la siguiente redacción;

Art. 8. Los condenados en libertad condicional que hayan cumplido la mitad de esta pena y hubieren observado durante este tiempo muy buena conducta, según se desprenda del Libro de Vidas que se le llevará a cada uno en la prefectura de policía, podrán ser beneficiados con la concesión de su libertad completa, por medio de una resolución de la respectiva Comisión.

<sup>29</sup> Para las referencias legales de este artículo 17 bis véanse las notas a pie de página del N°2 del ARTÍCULO PRIMERO.

<sup>30</sup> Art. 11. Son circunstancias atenuantes:

8°. Si pudiendo eludir la acción de la justicia por medio de la fuga u ocultándose, se ha denunciado y confesado el delito.  
9°. Si se ha colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos.

**Artículo Cuarto.-** Modifícase la ley N°18.050, que fija normas generales para conceder indultos particulares, en el siguiente sentido:

1. Agrégase en el artículo 1° el siguiente inciso final nuevo:

“Tampoco procederá respecto de personas condenadas por alguno de los delitos previstos en los párrafos 3 y 4, ambos del título III; en los párrafos 10 y 15, ambos del título VI; en los párrafos 5 y 6, ambos del título VII; y en los párrafos 1 y 3, ambos del título VIII; todos del Libro Segundo del Código Penal, que en conformidad al derecho internacional constituyan genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, cualquiera haya sido la denominación o clasificación que dichas conductas hubieren tenido al momento de su condena; o por alguno de los delitos tipificados en la ley N°20.357.<sup>31</sup>”<sup>32</sup>.

2. Sustitúyese el punto final del artículo 6° por la siguiente frase “, o de alguno de los delitos previstos en los párrafos 3 y 4, ambos del título III; en los párrafos 10 y 15, ambos del título VI; en los párrafos 5 y 6, ambos del título VII; y en los párrafos 1 y 3, ambos del título VIII; todos del Libro Segundo del Código Penal, que en conformidad al derecho internacional constituyan genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, cualquiera haya sido la denominación o clasificación que dichas conductas hubieren tenido al momento de su condena; o por alguno de los delitos tipificados en la ley N°20.357<sup>33</sup>.”<sup>34</sup>.

**Artículo Quinto.-** Modifícase el Código Procesal Penal:

1. Modifícase el artículo 458 en el siguiente sentido:

31 Para las referencias legales de este inciso final véanse las notas a pie de página del N°2 del ARTÍCULO PRIMERO.

32 El Artículo 1 quedaría con la siguiente redacción;

Art. 1. Toda persona que se encuentre condenada podrá solicitar al Presidente de la República que le otorgue la gracia del indulto, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley y en su reglamento.

No obstante, el indulto no procederá respecto de los condenados por conductas terroristas calificadas como tales por una ley dictada de acuerdo al artículo 9° de la Constitución Política del Estado.

Tampoco procederá respecto de personas condenadas por alguno de los delitos previstos en los párrafos 3 y 4, ambos del título III; en los párrafos 10 y 15, ambos del título VI; en los párrafos 5 y 6, ambos del título VII; y en los párrafos 1 y 3, ambos del título VIII; todos del Libro Segundo del Código Penal, que en conformidad al derecho internacional constituyan genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, cualquiera haya sido la denominación o clasificación que dichas conductas hubieren tenido al momento de su condena; o por alguno de los delitos tipificados en la ley N°20.357.

33 Para las referencias legales de este N°2 véanse las notas a pie de página del N°2 del ARTÍCULO PRIMERO.

34 El Artículo 6° quedaría con la siguiente redacción;

Art. 6. En casos calificados y mediante decreto supremo fundado, el Presidente de la República podrá prescindir de los requisitos establecidos en esta ley y de los trámites indicados en su reglamento, siempre que el beneficiado esté condenado por sentencia ejecutoriada y no se trate de conductas terroristas, calificadas como tales por una ley dictada de acuerdo al artículo 9° de la Constitución Política del Estado, o de alguno de los delitos previstos en los párrafos 3 y 4, ambos del título III; en los párrafos 10 y 15, ambos del título VI; en los párrafos 5 y 6, ambos del título VII; y en los párrafos 1 y 3, ambos del título VIII; todos del Libro Segundo del Código Penal, que en conformidad al derecho internacional constituyan genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, cualquiera haya sido la denominación o clasificación que dichas conductas hubieren tenido al momento de su condena; o por alguno de los delitos tipificados en la ley N°20.357.

a) Intercálase en el inciso primero entre el verbo “solicitará” y la frase “el informe psiquiátrico correspondiente”, la expresión “al Servicio Médico Legal”.

b) Agrégase el siguiente inciso final nuevo:

“El informe del Servicio Médico Legal deberá ajustarse a los protocolos referenciales que para estos efectos establezca la Dirección Nacional de dicho Servicio, los que deberán ser actualizados periódicamente.”<sup>35</sup>.

2. Modifícase el artículo 465 en el siguiente sentido:

a) Intercálase en el inciso primero a continuación de la frase “previo informe psiquiátrico”, la expresión “del Servicio Médico Legal”.

b) Agrégase el siguiente inciso segundo nuevo, pasando el actual a ser tercero:

c) “Dicho informe deberá cumplir las mismas exigencias indicadas en el inciso final del artículo 458<sup>36</sup>”.

d) Sustitúyese en el actual inciso segundo, que pasa a ser tercero, la palabra “anterior” por la expresión “del inciso primero”.

e) Sustitúyese en el inciso final la frase “en el momento de caer en enajenación el imputado”, por la expresión “el imputado cae en enajenación después de que”<sup>37</sup>.

3. Incorpórase a continuación del artículo 468 el siguiente artículo 468 bis nuevo:

**“Artículo 468 bis.** Condenado enfermo terminal. Si durante la ejecución de una sentencia que imponga una pena privativa de libertad, se diagnosticara al condenado una enfermedad terminal, el tribunal mediante resolución fundada, oyendo al fiscal y al defensor, previa certificación inequívoca del Servicio Médico Legal e informe psicosocial favorable de Gendarmería de Chile, podrá disponer la sustitución de la pena original, reemplazándola por la de reclusión

35 El Artículo 458 quedaría con la siguiente redacción:

Art. 458. Imputado enajenado mental. Cuando en el curso del procedimiento aparecieren antecedentes que permitieren presumir la inimputabilidad por enajenación mental del imputado, el ministerio público o juez de garantía, de oficio o a petición de parte, solicitará al Servicio Médico Legal el informe psiquiátrico correspondiente, explicitando la conducta punible que se investiga en relación a éste. El juez ordenará la suspensión del procedimiento hasta tanto no se remitiere el informe requerido, sin perjuicio de continuarse respecto de los demás coimputados, si los hubiere.

El informe del Servicio Médico Legal deberá ajustarse a los protocolos referenciales que para estos efectos establezca la Dirección Nacional de dicho Servicio, los que deberán ser actualizados periódicamente.

36 Véase el artículo quinto, número 1 de este proyecto de ley.

37 Artículo 465.- quedaría con la siguiente redacción:

Art. 465.- Imputado que cae en enajenación mental. Si, después de iniciado el procedimiento, el imputado cayere en enajenación mental, el juez de garantía decretará, a petición del fiscal o de cualquiera de los intervinientes, previo informe psiquiátrico del Servicio Médico Legal, el sobreseimiento temporal del procedimiento hasta que desapareciere la incapacidad del imputado o el sobreseimiento definitivo si se tratare de una enajenación mental incurable.

Dicho informe deberá cumplir las mismas exigencias indicadas en el inciso final del artículo 458.

La regla del inciso primero sólo se aplicará cuando no procediere la terminación del procedimiento por cualquier otra causa.

Si el imputado cae en enajenación después de que se hubiere formalizado la investigación o se hubiere deducido acusación en su contra, y se estimare que corresponde adoptar una medida de seguridad, se aplicará lo dispuesto en el Párrafo 2° de este Título.

domiciliaria total por el tiempo de ejecución que reste de la condena. Esta resolución será impugnada vía recurso de apelación, el que se tramitará según lo establecido en el artículo 69 inciso quinto<sup>38</sup> del Código Orgánico de Tribunales.

Se entenderá por reclusión domiciliaria total el encierro en el domicilio del condenado o en establecimientos especiales de salud durante las veinticuatro horas del día. Para el cumplimiento de esta pena sustitutiva el juez preferirá ordenar su ejecución en el domicilio del condenado, estimando como tal la residencia regular que éste utilice para fines habitacionales. La ejecución de esta pena sustitutiva se sujetará, en lo pertinente, a lo establecido en los incisos segundo y final del artículo 7°<sup>39</sup> y en los títulos III, IV y VI, todos de la ley N°18.216<sup>40</sup>.

La certificación referida en el inciso primero deberá contener, a lo menos, las razones que justifican que se trata de una enfermedad o condición patológica grave, progresiva e irreversible, que no tiene tratamiento eficaz de acuerdo a los conocimientos médicos y con pronóstico fatal en un plazo inminente. Dicha certificación se ajustará a los protocolos referenciales que para estos efectos establezca la Dirección Nacional del Servicio Médico Legal, los que deberán ser actualizados periódicamente.

En el caso de los condenados por alguno de los delitos previstos en los párrafos 3 y 4, ambos del título III; en los párrafos 10 y 15, ambos del título VI; en los párrafos 5 y 6, ambos del título VII; y en los párrafos 1 y 3, ambos del título VIII; todos del Libro Segundo del Código Penal, que en conformidad al derecho internacional constituyan genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, cualquiera haya sido la denominación o clasificación que dichas conductas hubieren tenido al momento de su condena; o por alguno de los delitos tipificados en la ley N°20.357<sup>41</sup>; se exigirá, además del cumplimiento de los requisitos generales, que suscriban en forma previa una declaración pública que contenga una manifestación inequívoca de su arrepentimiento por los hechos cometidos que les atribuye la sentencia condenatoria, por el contexto de los mismos y por el mal causado a las víctimas y sus familiares.

Respecto de estos últimos, y para los efectos de lo dispuesto en el inciso segundo, se entenderá como incumplimiento grave del régimen de ejecución de la pena cualquier acción o manifestación pública que constituya una negación o contradicción al contenido de la declaración referida en el inciso anterior.”.

#### 4. Modifícase el artículo 482 en el siguiente sentido:

- a) Intercálase a continuación de la frase “oyendo al fiscal y al defensor” la expresión “, y previo informe psiquiátrico del Servicio Médico Legal”.
- b) Agrégase el siguiente inciso final nuevo:

38 [Inciso quinto] Serán agregados extraordinariamente a la tabla del día siguiente hábil al de su ingreso al tribunal, o el mismo día, en casos urgentes:

- 1° Las apelaciones relativas a la prisión preventiva de los imputados u otras medidas cautelares personales en su contra;
- 2° Los recursos de amparo, y
- 3° Las demás que determinen las leyes.

39 Artículo 7. La pena de reclusión parcial consiste en el encierro en el domicilio del condenado o en establecimientos especiales, durante cincuenta y seis horas semanales. La reclusión parcial podrá ser diurna, nocturna o de fin de semana, conforme a los siguientes criterios:

Para el cumplimiento de la reclusión parcial, el juez preferirá ordenar su ejecución en el domicilio del condenado, estableciendo como mecanismo de control de la misma el sistema de monitoreo telemático, salvo que Gendarmería de Chile informe desfavorablemente la factibilidad técnica de su imposición, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 23 bis y siguientes de esta ley. En tal caso, entendido como excepcional, se podrán decretar otros mecanismos de control similares, en la forma que determine el tribunal.

Para los efectos de esta ley, se entenderá por domicilio la residencia regular que el condenado utilice para fines habitacionales.

40 Véanse las notas a pie de página del inciso segundo del nuevo artículo 468 del Código Procesal Penal, agregado por el ARTÍCULO QUINTO N°3 del proyecto de ley.

41 Para las referencias legales de este inciso véanse las notas a pie de página del N°2 del ARTÍCULO PRIMERO.



“El informe psiquiátrico del Servicio Médico Legal deberá dar cuenta del estado de salud mental del condenado. Dicho informe deberá cumplir las mismas exigencias indicadas en el inciso final del artículo 458<sup>42</sup>.”<sup>43</sup>

**Artículo Sexto.-** Modifícase el Código de Procedimiento Penal:

1. Modifícase el artículo 684 en el siguiente sentido:

- a) Sustitúyese en el inciso primero el verbo “podrá” por el verbo “deberá”.
- b) Agrégase en el inciso primero, a continuación del punto final que pasa a ser punto seguido, la siguiente frase: “Esta resolución será siempre apelable y, en caso de no interponerse recurso, deberá ser consultada.”
- c) Intercálase el siguiente inciso segundo nuevo:

“Dicho informe se ajustará a los protocolos referenciales que para estos efectos establezca la Dirección Nacional del Servicio Médico Legal, los que deberán ser actualizados periódicamente.”<sup>44</sup>

2. Modifícase el artículo 687 en el siguiente sentido:

- a) Intercálase en el inciso primero, a continuación de la frase “sentencia condenatoria”, la expresión “de término”.
- b) Agrégase en el inciso primero, a continuación del punto final que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración: “Esta resolución será siempre apelable y, en caso de no interponerse recurso, deberá ser consultada.”
- c) Agrégase el siguiente inciso final nuevo:

42 Véase el ARTÍCULO QUINTO, número 1 de este proyecto de ley.

43 El Artículo 482 quedaría con la siguiente redacción;

Art. 482. Condenado que cae en enajenación mental. Si después de dictada la sentencia, el condenado cayere en enajenación mental, el tribunal, oyendo al fiscal y al defensor, y previo informe psiquiátrico del Servicio Médico Legal dictará una resolución fundada declarando que no se deberá cumplir la sanción restrictiva o privativa de libertad y dispondrá, según el caso, la medida de seguridad que correspondiere. El tribunal velará por el inmediato cumplimiento de su resolución. En lo demás, regirán las disposiciones de este Párrafo. El informe psiquiátrico del Servicio Médico Legal deberá dar cuenta del estado de salud mental del condenado. Dicho informe deberá cumplir las mismas exigencias indicadas en el inciso final del artículo 458.

44 El Artículo 684 quedaría con la siguiente redacción;

Art. 684. Si después de cometido el delito cayere el imputado en enajenación mental, se continuará la instrucción del sumario hasta su terminación; y si no procediere sobreseimiento en la causa o en su favor, el juez decidirá si continúa o no el procedimiento, teniendo en consideración, para resolver, la naturaleza del delito y la de la enfermedad. Para este efecto, el tribunal deberá pedir informe al médico legista. Esta resolución será siempre apelable y, en caso de no interponerse recurso, deberá ser consultada. Dicho informe se ajustará a los protocolos referenciales que para estos efectos establezca la Dirección Nacional del Servicio Médico Legal, los que deberán ser actualizados periódicamente

El mismo procedimiento se aplicará cuando la enajenación mental sobrevenga en cualquier momento antes de dictarse la sentencia de término.

“La enajenación mental la certificará el Servicio Médico Legal mediante informe que dé cuenta de la salud mental del condenado. Dicho informe deberá cumplir las mismas exigencias indicadas en el inciso segundo del artículo 684<sup>45</sup>.”<sup>46</sup>

Incorpórase en el libro cuarto “Del cumplimiento y ejecución”, el siguiente título IV “De las medidas aplicables a los enfermos terminales”, nuevo:

## “TÍTULO IV

### DE LAS MEDIDAS APLICABLES A LOS ENFERMOS TERMINALES

**Artículo 697.** Si durante la ejecución de una sentencia, que imponga una pena privativa de libertad, se diagnosticara al condenado una enfermedad terminal, el juez mediante resolución fundada, previa certificación inequívoca del Servicio Médico Legal e informe psicosocial favorable de Gendarmería de Chile, podrá disponer la sustitución de la pena original, reemplazándola por la de reclusión domiciliaria total por el tiempo de ejecución que reste de la condena. Esta resolución será impugnabile vía recurso de apelación, el que se tramitará según lo establecido en el artículo 69 inciso quinto del Código Orgánico de Tribunales. En caso de no interponerse el recurso, dicha resolución deberá ser consultada<sup>47</sup>.

Se entenderá por reclusión domiciliaria total el encierro en el domicilio del condenado o en establecimientos especiales de salud durante las veinticuatro horas del día. Para el cumplimiento de esta pena sustitutiva el juez preferirá ordenar su ejecución en el domicilio del condenado, estimando como tal la residencia regular que éste utilice para fines habitacionales. La ejecución de esta pena sustitutiva se sujetará, en lo pertinente, a lo establecido en los incisos segundo y final del artículo 7° y en los títulos III, IV y VI, todos de la ley N°18.216<sup>48</sup>.

La certificación referida en el inciso primero deberá contener, a lo menos, las razones que justifican que se trata de una enfermedad o condición patológica grave, progresiva e irreversible, que no tiene tratamiento eficaz

45 Véase el ARTÍCULO SEXTO, número 1 de este proyecto de ley.

46 El Artículo 687 quedaría con la siguiente redacción;

Art- 687. Si después la sentencia condenatoria de término cayere el condenado en enajenación mental, dictará el juez una resolución fundada declarando que no se deberá cumplir la sanción restrictiva o privativa de libertad. El condenado cuya libertad constituya peligro será puesto a disposición de la autoridad sanitaria. Aquél cuya libertad no constituya riesgo será entregado bajo fianza de custodia y tratamiento, siempre que la pena o penas aplicadas constituyan en conjunto una privación o restricción de libertad por más de cinco años, si es inferior la condena, se le pondrá en libertad. Esta resolución será siempre apelable y, en caso de no interponerse recurso, deberá ser consultada.

Siendo curable la enfermedad, se suspenderá el cumplimiento de la sentencia en una resolución fundada, hasta que el enajenado recupere la razón. El condenado cuya libertad constituya riesgo, y el que, sin estar en tal caso, haya sido condenado a penas superiores a cinco años de restricción o privación de libertad, será internado en un establecimiento para enfermos mentales; en las demás situaciones será entregado bajo fianza de custodia o tratamiento de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 692.

En cualquier tiempo que el enfermo mental recupere la razón se hará efectiva la sentencia si no hubiere prescrito la pena. Si ella le impusiere privación o restricción de la libertad, se imputará a su cumplimiento el tiempo que haya durado la enajenación mental.

La enajenación mental la certificará el Servicio Médico Legal mediante informe que dé cuenta de la salud mental del condenado. Dicho informe deberá cumplir las mismas exigencias indicadas en el inciso segundo del artículo 684.

47 Actualmente, la consulta procede en los siguientes casos:

Art. 533. (568) Las sentencias definitivas de primera instancia que no fueren revisadas por el respectivo tribunal de alzada por la vía de la apelación, lo serán por la vía de la consulta en los casos siguientes:

- 1° Cuando la sentencia imponga pena de más de un año de presidio, reclusión, confinamiento, extrañamiento o destierro o alguna otra superior a éstas;
- 2° Cuando el fallo aplique diversas penas que, sumadas, excedan de un año de privación o de restricción de la libertad, debiendo, en uno y otro caso, considerarse consultable el fallo respecto de todos los delitos sancionados, y
- 3° Cuando el proceso verse sobre delito a que la ley señale pena aflictiva.

Regirá lo dispuesto en el artículo 528 bis, en cuanto sea aplicable a la consulta [es el caso en que la apelación de un reo aprovecha a otro, que no hubiere apelado].

48 Véanse las notas a pie de página del inciso segundo del nuevo artículo 468 del Código Procesal Penal, agregado por el ARTÍCULO QUINTO N°3 del proyecto de ley.

de acuerdo a los conocimientos médicos y con pronóstico fatal en un plazo inminente. Dicha certificación se ajustará a los protocolos referenciales que para estos efectos establezca la Dirección Nacional del Servicio Médico Legal, los que deberán ser actualizados periódicamente.

En el caso de los condenados por alguno de los delitos previstos en los párrafos 3 y 4, ambos del título III; en los párrafos 10 y 15, ambos del título VI; en los párrafos 5 y 6, ambos del título VII; y en los párrafos 1 y 3, ambos del título VIII; todos del Libro Segundo del Código Penal, que en conformidad al derecho internacional constituyan genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, cualquiera haya sido la denominación o clasificación que dichas conductas hubieren tenido al momento de su condena; o por alguno de los delitos tipificados en la ley N°20.357<sup>49</sup>; se exigirá, además del cumplimiento de los requisitos generales, que suscriban en forma previa una declaración pública que contenga una manifestación inequívoca de su arrepentimiento por los hechos cometidos que les atribuye la sentencia condenatoria, por el contexto de los mismos y por el mal causado a las víctimas y sus familiares.

Respecto de estos últimos, y para los efectos de lo dispuesto en el inciso segundo, se entenderá como incumplimiento grave del régimen de ejecución de la pena cualquier acción o manifestación pública que constituya una negación o contradicción al contenido de la declaración referida en el inciso anterior.



---

49 Para las referencias legales de este inciso véanse las notas a pie de página del N°2 del ARTÍCULO PRIMERO.